

¿COLAPSO PARCIAL O PRESENCIA DIFERENCIADA DEL ESTADO EN COLOMBIA?: UNA MIRADA DESDE LA HISTORIA

Fernán E. González¹

recibido 09/16/003, aprobado 10/06/003

El texto argumenta que la viabilidad de la democracia puede abordarse a partir de tres enfoques. A partir de los dos primeros, el modelo ideal occidental de la democracia y la idealización del pasado como período de armonía y orden, un Estado como el colombiano se consideraría como fallido. Al contrario, el tercer modelo, referido a un proceso paulatino de construcción del Estado, apuntaría a la reformulación diaria del Estado en Colombia. A través de un recorrido histórico por el proceso de democratización en Colombia, el autor se propone refutar la tesis del colapso del Estado colombiano.

Palabras Claves: debilidad estatal, Estado en construcción, violencia, clientelismo, populismo, modernización parcial, narcotráfico

The text argues that the problem of democratic viability can be approached through three perspectives. The first two, the Western ideal model of democracy and the idealization of the past as a period of harmony and order, lead to interpretations of the Colombian state as failed or collapsed. On the contrary, the third perspective, which refers to a gradual process of state-building, suggests that the Colombian state is reformulated on a daily basis. The author examines the democratization process in Colombia in order to refute the failed state thesis.

Keywords: state weakness, state-building, violence, clientelism, populism, partial modernization, drug trafficking

Introducción

En este trabajo examinare las condiciones de viabilidad o sostenibilidad de la democracia en la América Latina contemporánea, donde la crisis coyuntural de varios países ha llevado a preguntarse sobre la posibilidad de su eventual colapso o fracaso. En el caso colombiano, los desafíos que grupos

armados de diferente signo ideológico plantean al monopolio estatal de la fuerza y la justicia; así como los intentos fallidos o parcialmente neutralizados de recuperar la legitimidad de las instituciones representativas, han sido a veces interpretados como signos de una total bancarrota de la democracia en el país.

A esta mirada apocalíptica han contribuido el fracaso de las negocia-

¹ Historiador y científico político. Investigados del CINEP.

ciones del anterior gobierno con la guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), la penetración de recursos derivados de los cultivos de uso ilícito en la sociedad, economía y política; la enorme cantidad de población desplazada por causa del conflicto

armado; la grave crisis humanitaria evidenciada en violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho

El problema de la viabilidad de la democracia y de su eventual colapso o fracaso en Colombia puede afrontarse desde tres puntos de vista: desde un modelo ideal; desde una visión idealizada del pasado armónico y desde un proceso paulatino y conflictivo de construcción del Estado.

Internacional Humanitario; y la expansión del conflicto armado a las naciones fronterizas como Venezuela, Ecuador y Panamá. Esta mirada desestimulante ha llegado incluso a plantear la posible secesión del país entre un norte controlado por los grupos paramilitares de derecha (“Castaño-landia”), un sur en manos de las guerrillas de las FARC (FARC-landia) y un centro controlado por el Estado central (Pizarro y Bejarano, 2003). Esta mirada apocalíptica de buena parte de la sociedad influyó no poco en la acogida de las propuestas de recuperación de la autoridad estatal y lucha contra la corrupción del actual presidente, Álvaro Uribe Vélez.

Sin embargo, esta visión caótica de la realidad colombiana contrasta

con una notable estabilidad política y macroeconómica, junto con la fortaleza de algunas instituciones. En ese marco, Colombia podría definirse como una democracia electoral bastante consolidada, que cuenta con una larga historia de elecciones y con un su-

fragio cada vez menos restringido a pesar de las escasas movilizaciones ciudadanas, el alto nivel de abstención, y del corte clientelista que ha caracterizado la adhesión a los partidos

políticos durante el siglo XIX y buena parte del XX. Cabe agregar que, esta caracterización excluye de antemano la aplicación de esquemas tomados de las transiciones de las dictaduras antipopularistas o antipopulares a regímenes más democráticos en el Cono Sur.

Esta paradoja obliga a considerar que el problema de la viabilidad de la democracia y de su eventual colapso o fracaso en Colombia puede afrontarse desde tres puntos de vista: a. Desde un modelo ideal y abstracto de democracia, generalmente bastante idealizado, tomado de la experiencia de los Estados nacionales consolidados de Occidente que se pone a prueba en nuestros subdesarrollados sistemas y países; b. Desde una visión idealizada de un pasado donde reinaba la armonía

y el orden, una mítica *edad de oro* donde los valores cívicos y cristianos eran respetados, la ley era observada y las instituciones estatales tenían pleno control de la sociedad, desde la cual el presente se ve como *decadencia o caída, pérdida del monopolio estatal de la fuerza*; . c. Desde un proceso paulatino y conflictivo de construcción de las instituciones del Estado, que poco a poco va integrando las diferentes regiones del territorio nacional y articulando sus respectivas poblaciones al conjunto de la vida nacional, que implica también la gradual construcción del monopolio estatal de la coerción legítima.

Si se adopta las dos primeras perspectivas, se hablará de “Estado fallido” o “colapsado”, pero si se adopta el tercer enfoque, hablaríamos de “un Estado en construcción”, con una explícita referencia a los procesos de poblamiento del territorio, de organización de las sociedades en las respectivas regiones y de articulación de territorios y poblaciones al Estado Nación colombiano.

Orden y violencia: la paradoja colombiana

En ese sentido, algunos análisis como Francisco Leal Buitrago (1995) han venido señalando la paradoja existente entre la coexistencia de la estabilidad política y económica casi sin parangón en América Latina, con la persistencia de una violencia política y social también casi sin antecedentes en el subcontinente. Este contraste se expresa en la paradoja de orden y violen-

cia acuñada por Daniel Pecaú (1987) en el título de una de sus obras principales, o en la de “legitimidad y violencia” de Marco Palacios (1995). Así como para otros autores, como Eduardo Posada-Carbó (2003) sería precisamente la resistencia de las instituciones colombianas lo que hay que explicar, no su colapso.

Sin embargo, Leal es de la opinión de que la estabilidad macroeconómica e institucional no debería identificarse con el beneficio de los más ricos, como ha ocurrido hasta hoy: la pacificación del país no es posible sin mejorar las condiciones de los más pobres. En otro trabajo, este autor señala que este contraste refleja la existencia de un Estado políticamente débil, que ha dado ventajas para el enriquecimiento fácil y cuya estabilidad institucional no ha logrado canalizar la convulsión social, estos factores han propiciado la ausencia de medios efectivos de control social y oposición política democrática (Leal, 1996: 22).

Prueba de la estabilidad política al igual que de la continuidad civilista es que las dictaduras militares han sido excepcionales a lo largo de la historia de Colombia. Son sólo dos casos, ambas de corta duración: el gobierno del general José María Melo, quien después de su golpe militar en 1854, no alcanzó a durar un año; y el del general Gustavo Rojas Pinilla, que no completó los cuatro años. Conviene también tener en cuenta que en los dos casos, los golpes de Estado se enmarcaron dentro de las tensiones internas y divi-

siones de los partidos tradicionales y fueron finalmente neutralizados por la coalición de los dirigentes históricos de esos partidos, que impusieron un gobierno de coalición entre ellos.

Esta permanencia del control bipartidista de la vida política durante siglo y medio y la consiguiente ausencia de gobiernos populistas no descarta el surgimiento de algunos movimientos de ese corte en dos momentos históricos diferentes, con algunas relaciones con el bipartidismo, como el gaitanismo en los años cuarenta (Pecaut, 1994:505-510) y el anapismo en el Frente Nacional, que nunca lograron acceder al poder. Y tampoco descarta la capacidad de integración e inclusión que mantienen los partidos tradicionales por medio de sus diferentes facciones y disidencias, como es el caso del MRL (Movimiento Revolucionario Liberal), que recogía a los liberales reacios a aceptar el sistema de gobierno compartido del Frente Nacional, y la ANAPO (Alianza Nacional Popular), del general Rojas Pinilla, que en sus inicios recogía los conservadores opuestos a la alianza con el enemigo liberal y a los sectores modernizantes del conservatismo (Ayala, 1996).

Por esta capacidad de integración y cooptación, el fracaso de estos movimientos populistas para acceder al bloque no se produce en Colombia como en otros países latinoamericanos, por la intervención de unas fuerzas armadas, apoyadas por unos gremios empresariales alarmados ante el ascenso de las masas populares en la vida política

o la amenaza de reformas radicales, sino por el funcionamiento del sistema político bipartidista, con su mezcla de política tradicional y moderna y su legitimación electoral de corte clientelista.

Populismo ausente e inclusión clientelista

Para algunos autores como Marco Palacios es precisamente la ausencia o el fracaso de amplios movimientos populistas la causa de la violencia crónica al lado de la estabilidad institucional y la explicación de la persistencia de poderes tradicionales con capacidad de bloquear sistemáticamente los intentos reformistas y modernizantes. En cambio, en otros países de América Latina, el surgimiento y el auge de movimientos populistas de envergadura obligaron a la ampliación de la ciudadanía y a ciertas transformaciones del Estado (Palacios, 2001).

En cambio, otros como Daniel Pecaut (2000), opinan que la inexistencia del populismo se debe precisamente a la precariedad del Estado, al modelo privatizado de economía y la inserción clientelista de la población en la división creada por la subcultura bipartidista, que impidió la consolidación de una identidad nacional. En una línea similar a Pecaut, pero más referida a las relaciones entre ejecutivo y legislativo, Ronald Archer y Matthew Soberg Shugart (2002) han señalado que la incapacidad del sistema político colombiano para generar mayorías estables hizo difícil la búsqueda de soluciones

para los profundos problemas sociales de Colombia, sobre todo la violencia rural y urbana.

Así, es claro que en Colombia no se dan algunas de las condiciones sociales donde surgen los movimientos populistas de otros países hispanoamericanos, ya que nunca experimentó grandes booms exportadores que hicieran crecer los recursos fiscales del Estado que lo convirtieran en un Estado “rentista”, ni tampoco grandes migraciones de trabajadores europeos que en otros países del continente fueron la base de movimientos sindicales de corte anarquista. En ese sentido, por una parte, la debilidad del Estado fue el resultado de la pobreza fiscal, que no permitió la aparición de una amplia burocracia estatal ni consolidar un verdadero “Estado del bienestar”; pero, por otra parte, tampoco se presentaron, como el caso de otros países latinoamericanos una ampliación de las capas medias urbanas, ni grandes presiones de las masas populares, que obligaran a ampliar la ciudadanía ni a incrementar el gasto público (Pecaut, 1987:227-230).

Por otra parte, autores como Nicos Mouzelis (1994) han mostrado, a partir de la comparación entre los casos de Grecia, Argentina y Brasil que las formas de inclusión populista de las masas populares no son esencialmente diferentes de los mecanismos clientelistas presentes en la vida política colombiana. Este autor parte del contraste entre las maneras como son integradas las masas populares en los sistemas po-

líticos en los países centrales y en los periféricos. En los primeros, las clases bajas y sus organizaciones lograron insertarse de modo más autónomo y menos vertical, ya que pudieron aprovechar que la todavía restringida expansión del Estado permitía todavía la creación de una sociedad civil fuerte. En cambio, en las sociedades periféricas la expansión del Estado y el paso de los “clubes de notables” a partidos políticos de masas tuvo lugar en un contexto donde las organizaciones sindicales y populares eran débiles y el Estado tenía suficiente fuerza para inhibir la formación de grupos autónomos de interés (Mouzelis, 1994:466).

El clientelismo es una forma de desarrollo político que incorpora a las clases medias y bajas en la arena política alterando lo menos posible el discurso y el estilo organizativo del periodo oligárquico.

Existen diferencias fundamentales entre las dos formas de integración política: las redes verticales del clientelismo constituyen una buena solución para los problemas creados por la ampliación de la participación política en países periféricos y semiperiféricos cuando ésta se produce de manera gradual. En cambio, el populismo representa otra manera, igualmente restrictiva y vertical, de responder al aumento de la participación política de las masas populares cuando la irrupción de

ellas en la política es tan abrupta que sobrepasa la capacidad de las redes clientelistas para encauzarlas.

En ese sentido, los partidos clientelistas de los regímenes postoligárquicos pueden ser vistos como una cierta forma de centralización y modernización que muestra mayor continuidad con la política tradicional en comparación con los modos de inclusión populista, que implican una mayor ruptura con el liderazgo tradicional: el clientelismo es una forma de desarrollo político que incorpora a las clases medias y bajas en la arena política alterando lo menos posible el discurso y el estilo organizativo del periodo oligárquico. En la estructura clientelista burocrática no hay una ruptura radical con el sistema de notabato oligárquico, pues los nuevos jefes quiebran el dominio oligárquico pero transformando las redes existentes de patronazgo en su propio beneficio, mientras que los jefes surgidos en la movilización populista consolidan su nuevo poder con un estilo diferente de liderazgo, que deja de lado los grupos de intermediarios y crea una organización administrativa de relación más directa entre gobernantes y gobernados. Sin embargo, algunos autores plantean que no hay una ruptura tan total entre el clientelismo y el populismo, sino que puede haber una combinación entre ambos (Argüeyo, 2001:227-231).

Esta cierta relación de continuidad entre clientelismo, populismo y ciudadanía es corroborada de alguna manera por estudios de carácter histó-

rico y antropológico. En ese sentido, puede ser útil recordar las reflexiones que Francisco-Xavier Guerra (1982) y Fernando Escalante (1993) que han elaborado sobre los efectos que produce la superposición de formas e instituciones políticas, tomadas de la experiencia de países donde se ha consolidado el dominio directo del Estado sobre la población, sobre Hispanoamérica y especialmente sobre México, que es el ámbito de sus análisis. En ese sentido, Guerra sostiene la *necesidad política del gamonalismo o cacicazgo electoral como intermedio preciso entre sociedad tradicional y Estado moderno* (Guerra, 1982). Al respecto, Escalante critica los enfoques que suponen una radical incompatibilidad entre formas clientelistas y formas ciudadanas de actividad política y predicen una ineluctable evolución lineal entre las primeras y las segundas. Según este autor, estas concepciones se basan en la consideración simplista de que el poder del Estado viene aumentando siempre a costa del poder de todas las demás instituciones sociales: esta concepción hace percibir la permanencia del clientelismo como una malformación congénita y una desviación del proceso histórico de las tendencias hacia la individualización y estatalización de la política, que “simula, jurídicamente, un espacio social homogéneo, hecho de individuos”.

En su crítica, Escalante señala que estos procesos no agotan el campo de la política por dos hechos: en primer lugar, lo social sólo existe en formas de conexión colectiva, pues ninguna socie-

dad, por individualista y moderna que sea, está totalmente “atomizada”, ni es el resultado mecánico de la suma de individuos aislados, sino que está siempre basada en comunidades, asociaciones y redes previamente existentes, aunque ellas no estén sancionadas legalmente. Y, en segundo lugar, el necesario papel de intermediación que juega la clase política tradicional entre la sociedad y el Estado es indispensable para que operen los mecanismos del Estado: “la representación, la administración y la toma de decisiones” (Escalante, 1993).

Por lo tanto, para el análisis del caso colombiano, es importante considerar la manera como Escalante describe los problemas que se presentan cuando una clase política entra en decadencia y se muestra incapaz de mantener el orden, administrar los conflictos y “reducir la complejidad de la vida social”. Entonces su incapacidad hace ver más escandalosos los arreglos, los políticos resultan ser no solo inescrupulosos sino también inútiles y se produce una reiterada demanda social por la legalidad, la mayor presencia del Estado y nuevas formas de representación política por fuera de los partidos, exterior al sistema político. Los casos que utiliza este autor para ejemplificar estas tendencias son el Perú de Fujimori y la Italia de Berlusconi, pero menciona también a “otros liderazgos de tipo bonapartista de “hombres nuevos” llegados para barrer la corrupción de una clase política caduca”. Hoy tendría que nombrar a Hugo Chávez y Lucio

Gutiérrez, junto con Antanas Mockus y Álvaro Uribe Vélez.

Crisis de representación política y cambios en la percepción del conflicto armado

La anterior descripción de Fernando Escalante parece dibujar la manera como buena parte de la opinión pública percibía la situación de la crisis política y de la violencia cuando se producía la ruptura de las conversaciones de paz entre las FARC y el gobierno Pastrana. La coyuntura de entonces se caracterizaba en primer lugar, por una profunda polarización y fragmentación del país en torno al proceso de paz, especialmente a la existencia de una zona desmilitarizada. Y en segundo lugar, por una igualmente profunda crisis de representación política de la sociedad, que tiende a percibir como ilegítimos a los partidos tradicionales y a descalificar la actividad política tradicional como esencialmente corrupta.

El escepticismo creciente de la opinión pública frente a las posibilidades del proceso de paz con las FARC se conjugó con el rechazo moralista de las prácticas tradicionales de la política para producir los resultados electorales que vimos en los pasados comicios. Esta coyuntura desembocó en el triunfo electoral de Álvaro Uribe Vélez, cuya votación principal se concentró en las zonas más integradas a la economía del país, especialmente en las grandes ciudades, recogiendo el descontento de varios sectores de la opinión pública

frente a la manera como se había venido negociando con la guerrilla, lo mismo que su desconfianza frente a candidatos asociados con el estilo tradicional de actividad política (Pecaut, 2003).

Esta polarización en torno al conflicto significó un cambio importante en las costumbres políticas del país, ya que el apoyo mayoritario a Álvaro Uribe Vélez y a los parlamentarios que habrían expresado su apoyo por la “línea dura” que él impulsaba rompió las lealtades tradicionales a los partidos y a sus jefes locales y regionales, que se vieron obligados a sumarse a Uribe, incluso en contra de sus preferencias personales y lealtades previas a otros candidatos. En ese sentido, la novedad de las elecciones del año pasado fue la superación de la tendencia histórica de la mayoría de la población colombiana a alinearse con sus jefes tradicionales, regionales y locales, normalmente adscritos a los partidos tradicionales². Sin embargo, esta tendencia fue contrastada por una votación importante por políticos independientes de los partidos tradicionales (más de un millón de votos), más cercanos a la salida negociada del conflicto.

La tendencia antipolítica y la ruptura de las lealtades tradicionales se mostraba también en el creciente descrédito de los congresistas y políticos profesionales. No deja de ser preocu-

pante el alarmante grado de impopularidad del Congreso, cuyo papel aparece como carente de importancia para la mayoría de la población colombiana. En una encuesta de entonces, el 49% opinaba que el actual Congreso le aporta poco al país mientras que el 28% cree que no le aporta nada, y solo el 9% sostiene que le aporta mucho (*Semana*, marzo 2002). Bajo el gobierno de Uribe, parecía mejorar un tanto la tendencia: según la encuesta Invamer Gallup (*El Tiempo*, 2003^a), del 23 de julio, el Congreso obtenía un 39% a favor y un 44%. Pero, para la encuesta realizada por Napoleón Franco (*El Tiempo*, 2003^b), pocos días después, la tendencia se mantenía: la aprobación del Congreso era sólo del 21% pero la desaprobación también descendía al 44%; el partido liberal recibía un 34% de aprobación contra un 39% de desaprobación, mientras el partido conservador caía a un 22% de favorabilidad y un 48% de desfavorabilidad.

Estos índices contrastan enormemente con el 78% a favor y 21% en contra que otorga al presidente Uribe la encuesta de Franco, y el 64% de aprobación y el 26% de desaprobación que le da la de Invamer Gallup. Sólo su gestión económica es descalificada (48% a favor y 45% en contra). Por lo tanto, es muy clara la tendencia al optimismo en la percepción de la situación. Al lado de este rechazo a la clase política tradicio-

² Tanto el candidato conservador a la presidencia, Juan Camilo Restrepo, como el candidato liberal al Congreso, Juan Martín Caicedo Ferrer, confesaron que varios jefes habían manifestado que ellos eran personalmente seguidores suyos, pero que sus electores ya habían decidido apoyar a Uribe Vélez.

nal, este virtual unanimismo en torno a la figura del presidente Uribe, y a su vez a su ministra de defensa y el comandante de las fuerzas militares aparece ligado también a un cambio de la percepción de la población colombiana sobre el conflicto armado. En los años sesenta y setenta, el conflicto armado y la actividad guerrillera eran percibidos por el grueso de la opinión pública como algo que ocurría lejos de las ciudades,

en zonas de colonización campesina periférica, que no afectaba su vida cotidiana ni la economía nacional. Recientemente, la violencia ha logrado afectar a la economía, ataca la infraestructura vial y petrolera, irrumpe en la vida política mediante los secuestros de parlamentarios y políticos, cobra impuestos, secuestra en las carreteras no solo a los más ricos sino a personas de sectores medios y populares y realiza acciones terroristas en las ciudades principales.

Por otra parte, la opinión pública urbana y los medios masivos de comunicación no perciben los trasfondos social, económico y político del conflicto armado, pues éstos tienen que ver más con los problemas del mundo agrario y campesino, donde son reclutados los miembros de las guerrillas, de los paramilitares y del ejército nacional. Por eso, las pasadas elecciones

parlamentarias y presidenciales se vieron polarizadas por las posiciones contradictorias frente a los diálogos del gobierno Pastrana con las FARC y muy especialmente frente a la zona desmilitarizada. Incluso, el mismo fracaso de estas negociaciones evidenció una falta de consenso de la opinión pública

colombiana sobre la naturaleza y el origen del conflicto armado, que es percibido de ma-

Los abusos de la guerrilla han llevado al apoyo casi unánime de la población a la propuesta del presidente Uribe de recuperación de la autoridad del Estado.

nera diferenciada por los diferentes sectores de la sociedad (Palacios, 2001).

Este endurecimiento de la opinión pública en torno a las negociaciones con la guerrilla y la zona de despeje se veía fortalecido por los continuos abusos que la guerrilla cometía en la zona de despeje y en las regiones aledañas, al lado de la manera ligera e improvisada como el gobierno Pastrana manejó el proceso del diálogo. Esta improvisación se hizo evidente en la manera como otorgó a las FARC la zona desmilitarizada, sin condiciones previas ni controles y como dejó toda la iniciativa de la discusión de las reformas sociales y económicas de la agenda convenida en manos de este grupo guerrillero. Por eso, opinaba Hernando Gómez Buendía (2002) que “la ruptura” del proceso de paz evidenciaba un malentendido fundamental” entre las partes: las FARC pensaban que las re-

formas sociales eran la condición previa para la suspensión de hostilidades, mientras que la opinión pública insistía en que mientras las FARC continuara su accionar violento, no había nada que negociar.

Estos malentendidos de la población y los abusos de la guerrilla han llevado al apoyo casi unánime de la población a la propuesta del presidente Uribe de recuperación de la autoridad del Estado y a las medidas tomadas en su gobierno en esa dirección, como el mayor control de las principales vías terrestres, el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, la mayor presencia del ejército y policía en el territorio, la creación de las zonas de rehabilitación en regiones conflictivas, etc. Incluso, el aumento de acciones terroristas como la bomba de El Nogal y los fracasos militares como el que ocasionó la muerte del gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, y su asesor, el ex ministro Echeverri, terminaron aumentando su popularidad al refrendar la necesidad de una política de “mano dura” contra la guerrilla (Pecaut, 2003:91-92).

¿Colapso parcial o precariedad del Estado?

La situación de escalamiento y expansión de la violencia y el descrédito de los partidos políticos y del Congreso han sido leídos por algunos como una reedición de la categoría de “colapso parcial del Estado”, acuñada por Paul Oquist (1978) para describir la situación creada por la Violencia de los

años cincuenta. Como índices de esta situación, Eduardo Pizarro Leongómez y Ana María Bejarano (2003) toma las altas tasas de homicidio, la ineficiencia y corrupción de la policía, la consiguiente expansión de la seguridad privada, la expansión difusa de la actividad de guerrilleros y paramilitares, la erosión del sistema de justicia con altos índices de impunidad, el aumento de armas en manos civiles y la falta de presencia de las instituciones estatales en algunas regiones del país, como las de colonización.

Para Paul Oquist (1978:47), uno de los clásicos analistas de la Violencia de los años cincuenta, dicho colapso se manifestaba en la “crisis e inoperancia de las instituciones establecidas, la pérdida de legitimidad del Estado, la apelación del mismo a prácticas terroristas (...), la ausencia física del Estado en grandes regiones del país y las contradicciones dentro del aparato armado del mismo”. El enfoque de Oquist (1978) centra el problema en las relaciones entre aparatos del Estado y sociedades regionales. En ese mismo estilo de relación, Daniel Pecaut (2001) prefiere hablar de “precariedad del Estado” en el contexto de su polémica con algunos autores que explican la violencia reciente como una respuesta a las limitaciones, implícitas o no, que el régimen bipartidista del Frente Nacional imponía a la vida política colombiana. Sin negar esas obvias restricciones, este autor recordaba el carácter de pacto pacificador y civilizador que tuvo este régimen, subrayando sus re-

sultados innegables y mostrando cómo no ahogó del todo la competencia política. Según Pecaú el visualizar como cerrado el Frente nacional significa una oposición a tener en cuenta lo que él considera “el factor central de la historia colombiana”: *“la precariedad del Estado nación... que sirve de contexto a la recurrencia de la violencia”* (Pecaú, 2001: 27-34).

Para Pecaú, algunos rasgos de esta precariedad son reconocidos por los analistas: todos admiten que el Estado no ejerce su autoridad en vastas regiones del país, como las de colonización reciente, lo que deja el campo abierto al “uso privado de la fuerza” y a instituciones sustitutivas como las organizaciones guerrilleras. Pero la falta de autoridad estatal en esas zonas es solo un aspecto de la precariedad del Estado Nación, que reside fundamentalmente en su incapacidad para consolidar su influencia en la sociedad. Esta incapacidad, sostiene este autor, obedece a que las simbologías de los intervencionismos económico y social no encontraron en Colombia condiciones para su desarrollo: ni el sector exportador cafetero ni la naciente industria tuvieron que recurrir al Estado para aliviar sus problemas en la depresión de los años treinta. Tampoco el intervencionismo social se puso al servicio de la consolidación del Estado sino que fue un instrumento del partido liberal para consolidarse dentro del electorado urbano, ya que, según él, la identificación con los partidos tradicionales como subculturas contradictorias y mutua-

mente excluyentes no daba lugar para “una imagen unificada de la Nación, ni para un Estado independiente de los partidos” (Pecaú, 2001:35).

Sobre estas bases, la sociedad colombiana avanzó en el siglo XX, sin que las estructuras y la concepción del Estado hayan sido profundamente alteradas. Sin embargo, matiza Pecaú, esta precariedad tuvo algunas ventajas, pues contribuyó a la continuidad de la democracia al privar de un eventual apoyo a intervenciones militares o a tendencias autoritarias de sectores civiles y hacer difícil el desarrollo de populismos económicos y políticos. Pero impidió también cualquier modernización significativa del Estado que era necesaria para la regulación de la vida económica y social, alimentó el clientelismo y permitió que aflorara una violencia multifacética, que expresa la incapacidad del Estado para detentar el monopolio de la coerción legítima (Pecaú, 2001:35-36).

Hacia la presencia diferenciada del Estado

A nuestro modo de ver, tanto el llamado “colapso parcial” como la designada “precariedad del Estado” expresan la manera diferenciada como los aparatos del Estado hacen presencia en las diferentes regiones del país y la manera disímil como las diversas regiones y sus poblaciones se han ido integrando a la vida nacional a través de los partidos tradicionales tanto como federaciones de redes de poder local y

regional, como subculturas políticas. La diferenciación regional de la violencia, señalada por

Oquist y Roldán (1978), y el estilo precario de presencia de las instituciones estatales en la vida económica y social del país, mediado por las redes bipartidistas de poder, enfatizado por Pécaut, nos han llevado a pensar que esta diferenciación regional de la violencia y de la consiguiente respuesta del Estado implica también una diferenciación regional de la presencia del Estado (González, Bolívar y Vásquez, 2003:218-232). Esta diferenciación se expresa en distintos tipos de relación con los “notables” de las sociedades locales y regionales, cuyo grado de poder determina hasta qué punto el dominio del Estado colombiano se aproxima a las categorías de dominación de tipo “directo” o “indirecto”, según la terminología de Charles Tilly.

Por eso, las dinámicas de violencia se entienden mejor si se abandona la imagen monolítica de nuestro modelo de Estado y se enfatizan las diferentes formas como el Estado colombiano hace presencia en las regiones y localidades, lo mismo que en los diferentes tiempos en que esta presencia se articula con los poderes que surgen en ellas. Una será la violencia que confronta el dominio directo del Estado, muy

Las dinámicas de violencia se entienden mejor si se abandona la imagen monolítica de nuestro modelo de Estado y se enfatizan las diferentes formas como el Estado colombiano hace presencia en las regiones y localidades.

distinta de la que se desarrolla donde este dominio del Estado debe ser negociado y articulado con las estructu-

ras de poder, y otra, muy diferente, es la violencia que se produce donde no se han logrado consolidar los mecanismos tradicionales de regulación social, o donde estos mecanismos están haciendo crisis.

En esas regiones, no hay un actor claramente hegemónico sino una lucha por el control territorial con predominios cambiantes según la coyuntura, que dejan a la población civil expuesta al cruce de fuegos y a los cambios fluctuantes de “soberanías fluidas” de uno u otro de los actores armados. En estas regiones, los aparatos del Estado se mueven como otro actor local más, entremezclándose de manera difusa con los poderes de hecho que se están construyendo en ellas (González, Bolívar y Vásquez, 2003:197-236). En sentido similar, Malcolm Deas (1995) hace caer en la cuenta de que la mayor parte de los hechos violentos se producen en zonas donde el Estado carece del monopolio de la fuerza y la lucha de la insurgencia se concentra en la disputa con otros grupos por el control del territorio.

Por otra parte, este concepto permite tanto visualizar la importancia del bipartidismo en la vida política co-

lombiana como entender las razones de la permanencia del clientelismo: los partidos liberal y conservador a lo largo del siglo XIX y buena parte del XX permitieron al Estado hacer algún tipo de presencia en las regiones y crear algún tipo de articulación de los grupos locales y regionales de poder, con sus respectivas clientelas, al conjunto de la nación, junto con cierto sentido de pertenencia suprarregional más allá de las identidades locales y regionales.

Es una integración, desde arriba, de las clases populares a la vida política nacional por la vía del patronazgo clientelista, que permite la legitimación electoral de los partidos y gobiernos, y se complementa en algunos momentos con una integración menos vertical, cuando se movilizan de manera menos subordinada a las clases populares para respaldar los proyectos modernizantes o desplazar al adversario del poder. Así, el clientelismo cumpliría la función de inclusión vertical y subordinada de las masas populares a la vida política nacional, sin amenazar la estabilidad del régimen político, lo mismo que de expresar las necesidades e intereses particulares de grupos y regiones que pueden ser pasados por alto por la mentalidad tecnocrática y burocrática de los funcionarios del poder central.

Para entender mejor este papel, conviene tener en cuenta las dinámicas del poblamiento del territorio de la nación, ya que, como muestra Ernest Gellner (1992:22), una de las condiciones para configurar el control

de un poder central en un territorio es la delimitación y fijación de la población en él. Además, hay que considerar la manera paulatina como se consolidan los mecanismos internos de regulación social a los que se referían Oquist y Roldán (1978) como elementos que compensaban la falta de regulación estatal en los territorios integrados: estos mecanismos se construyen a partir de los procesos de estratificación, jerarquización y cohesión social, que son la base de los poderes locales y regionales, que se articulan entre sí mediante las federaciones laxas de poder de los partidos tradicionales y sus correspondientes adscripciones clientelares, que permiten su funcionamiento como subculturas. Estas interdependencias entre elites regionales y locales, con sus respectivas clientelas, vehiculadas por los partidos liberal y conservador, permitieron al país compensar de alguna manera la fragmentación regional que ha mostrado Marco Palacios (2002:21-58).

A nuestro modo de ver, tanto los procesos de poblamiento como los de construcción de cohesión y regulación social tienen que ver con la manera particular como el país afrontó el problema agrario y se reflejan especialmente en el estilo particular de formación del Estado y el papel fundamental que juegan en él los partidos políticos tradicionales, el liberalismo y el conservatismo (González, 1997:21-70). No es extraño entonces que los movimientos guerrilleros y la producción de cultivos de uso ilícito surjan en zonas de colonización campesina marginal, donde es

escasa la presencia de los aparatos del Estado y donde no se han consolidado todavía los mecanismos internos de regulación social que permiten a los partidos tradicionales establecer sus bases regionales de poder. Ni que los movimientos guerrilleros de las guerras civiles del siglo XIX surjan en situaciones semejantes y que la geografía de la violencia de los años cincuenta tienda a coincidir con las zonas de colonización aluvional y anárquica.

El papel del bipartidismo en Colombia

En el caso de Colombia, los partidos tradicionales han desempeñado, al menos durante el siglo XIX y la primera mitad del XX, la función de mediación entre el Estado y los grupos dominantes de la sociedad como respuesta a la fragmentación del poder en los niveles nacional, regional y local, que caracteriza la historia independiente del país al desaparecer el poder unificador de la Corona española. Para entender las vicisitudes de estos partidos, hay que combinar la mirada de los conflictos nacionales con la consideración de los conflictos en las localidades y regiones. Este proceso supone, en primer lugar, la existencia de grupos oligárquicos que compiten entre sí por el control político de su región o localidad, donde se mezclan los intereses económicos con las rivalidades personales y familiares, enfrentamientos intrafamiliares, choques generacionales, etc., combinada con la existencia de rivalida-

des intrarregionales e interregionales por motivos de diversa índole, rivalidades económicas o conflictos de carácter político-administrativos. En segundo lugar, la existencia de intereses regionales y locales contrapuestos a los intereses de largo plazo y de conjunto de la nación en formación. Y en tercer lugar, la existencia de varios proyectos de unidad nacional, expresados casi siempre por grupos de intelectuales y burócratas, localizados generalmente (pero no siempre) en la capital de la nación. De ahí la importancia de analizar las relaciones que se establecen entre la burocracia de la capital, las burocracias regionales y las redes de parentesco o interrelación entre las élites regionales y locales. (González, 1997:26-28)

Este papel del bipartidismo hace que la historia política colombiana se mueva en dos niveles, el de la federación de grupos regionales y locales de poder y el de los proyectos del orden nacional. Los primeros se mueven en una lógica política más tradicional, al reflejar las jerarquías sociales y económicas ya existentes en las regiones y sus relaciones de tipo clientelar con la población de las respectivas regiones y localidades. Mientras que los proyectos de orden nacional se mueven en un mundo político más moderno, basado en adscripciones más voluntarias de los pobladores, interesado en vincularse a los mercados internacionales y al orden político mundial. Esta relación entre modernidad y tradición es compleja y dinámica, ya que se ha venido modificando con los diferentes intentos de

modernización política y los cambios de la sociedad en ese mismo sentido.

Así, las reformas de llamada Revolución Liberal de mediados del siglo XIX trataron de insertar al país en el mercado mundial y de ponerlo al día con respecto al mundo moderno, lo mismo que secularizar la sociedad y ampliar la ciudadanía, con una concepción leseferista de Estado. Sin embargo, tal y como muestra Malcolm Deas (1993:217-218), el Estado central no tenía entonces suficientes recursos para funcionar en ese estilo centralizado, pues antes de los años veinte del siglo pasado la pobreza fiscal del gobierno hacía que no fueran muy fuertes los nexos entre los gobierno central, departamental y local. Solo en los años veinte se altera este equilibrio cuando llegan buenos precios del café, petróleo y banano, la indemnización por Panamá y los grandes empréstitos extranjeros. Esto favoreció al gobierno conservador de entonces al permitirle fortalecer las cadenas del patronazgo del Estado central, pero aún entonces la pobreza generalizada de los municipios hacía que el aumento de los ingresos del Estado central siguiera siendo insuficiente para satisfacer todas las necesidades.

Esta situación llevaba a concentrar los recursos en las regiones y políticos leales al gobierno en un reparto de favores que imposibilitaba un manejo racional y planificado de los recursos y modificó el sentido de la actividad política local, al convertir a los gamonales locales en intermediarios de los in-

tereses locales y regionales frente al gobierno central y permitir la construcción de “maquinarias electorales”, que articulaban a los congresistas con el gobierno central y las administraciones departamentales y municipales. Sin embargo, en este período se producen algunos intentos iniciales de modernización de la administración del Estado colombiano, gracias a las recomendaciones de la Misión Kemmerer en 1923: se dio así una mayor presencia del estado en la economía nacional por medio de mayor gasto público, junto con los primeros pasos para un nuevo papel del Estado en el proceso de modernización del país.

Este proceso de modernización del Estado se profundizaría con la llamada República Liberal de los años treinta, después del colapso de los precios del café y los problemas de la deuda externa, profundizados por la crisis mundial de 1929. La reforma tributaria de 1935, que hacía parte de un programa más amplio de estabilización monetaria y fiscal y de una más ambiciosa reforma social, significó un notable aumento de los ingresos estatales. Este aumento de ingresos permitió al gobierno de entonces una presencia más significativa en la sociedad colombiana, pero sin lograr una política muy intervencionista para el desarrollo de la economía, en parte debido a la resistencia de los sectores cafeteros e industriales, que no necesitaban el apoyo del Estado (Ocampo, 1987).

Por otra parte, el manejo del Estado seguía moviéndose dentro de la

lógica del manejo partidista tradicional: el personal administrativo del Estado se recluta según la adscripción al partido de gobierno y los altos cargos de la política económica se llenan con diri-

gentes provenientes de los gremios empresariales, lo que hace que los intereses privados sigan prevaleciendo dentro del propio gobierno. Esta situación es calificada por Daniel

Pecaut como verdadero “cogobierno” de los gremios y llega a Francisco Leal a caracterizarla como “corporativismo en la sombra”, que se hará evidente en la postura común de los gremios empresariales frente al intervencionismo estatal, a pesar de sus fisuras internas (Leal, 1995:30).

Ahora bien, en ese ambiente de polarización política y social, el estallido de la Violencia de los años cincuenta produce una desarticulación del poder en los niveles nacional, regional y local: ella hace aflorar la fragmentación de poder oculta bajo la articulación del bipartidismo ya que la lucha guerrillera liberal se desarrolla en el nivel local rural, con poca coordinación con el mundo urbano y bastante desacuerdo con la dirigencia liberal, aunque subsista la alusión a la pertenencia al partido liberal como la única “referencia cons-

titutiva de la identidad colectiva”, en palabras de Daniel Pecaut.

Además, los conflictos entre guerrillas liberales y comunistas contribuyeron a la fragmentación del campe-

sinado. Por todo esto, uno de los resultados más notorios de la violencia fue “un proceso sin precedentes de desorganización del campesinado”, que queda ahora atomizado y presionado a migrar

Uno de los resultados más notorios de la violencia fue "un proceso sin precedentes de desorganización del campesinado", que queda ahora atomizado y presionado a migrar a las cabeceras municipales.

a las cabeceras municipales y ciudades cercanas. Pero, paradójicamente, señala Pecaut, otro de los resultados de la Violencia fue infundir mayor intensidad a la pertenencia a los partidos tradicionales porque la referencia al enfrentamiento bipartidista se convirtió en “la única posibilidad de dar sentido a esta experiencia vivida por una generación de colombianos” (Pecaut, 1987: 565-566 y 571-573). En ese sentido, tanto la Violencia como el Frente Nacional reforzaron la función de los partidos tradicionales para encuadrar la mayoría de la población nacional lo mismo que su papel de marco de referencia para las identidades colectivas de la mayoría de la población.

Alcances y limitaciones del Frente Nacional

En ese sentido, el Frente Nacional constituyó la solución a un

problema básico de Colombia, la falta de orden político, mediante un intento importante de civilizar los enfrentamientos de los partidos. Se buscaba entonces un régimen para la convalecencia democrática, la deposición del dictador militar y el retorno a los gobiernos civiles mediante un filtro jurídico institucional que moderara la competencia bipartidista de modo que no se saliera de los cauces prefijados, pero que mantuviera una total apertura para la expresión de la lucha entre las facciones internas de los partidos. La limitación de la competencia bipartidista buscaba la destrucción del sectarismo, hasta entonces base de la adhesión popular a los partidos, que se compensaba ahora con la ampliación burocrática y el acceso a los recursos estatales como respuesta pragmática a las demandas de jefes locales y regionales (Dávila, 2002:95) .

Sin embargo, el Frente Nacional no contó con una clara comprensión de las formas como se producía la violencia, razón por la cual los planes de rehabilitación se vieron limitados. Según señala acertadamente Gonzalo Sánchez (1988): estas limitaciones se reflejaron en un recrudecimiento de los hechos violentos durante el primer gobierno del Frente Nacional y un surgimiento de fenómenos de bandolerismo. En palabras de Sánchez, lo que quiso hacer e hizo el pacto bipartidista fue “disociar el conflicto bipartidista del conflicto social y crear una artificial atmósfera de paz en un contexto de profundas con-

tradiciones sociales surgidas a la sombra, bajo el estímulo, o al margen del enfrentamiento bipartidista” (Sánchez y Maertens, 1989). En esta misma línea de análisis, Francisco Leal Buitrago sostiene que lo que logró hacer el Frente Nacional fue “desmilitarizar” el conflicto político, lo que produjo formas de “bandolerismo social” por la desconexión explícita que efectuó el bipartidismo frente a la violencia, lo que dio paso a una nueva fase de hechos violentos (1958-1965), que terminó en 1965 con el exterminio militar de casi todos los caudillos. En esta nueva fase, la violencia deja entonces de ser mediada por el bipartidismo, lo que elimina ciertas formas para su control y canalización por parte del régimen (Leal, 1987).

A pesar de estas limitaciones, el Frente Nacional representó un nuevo intento de modernización del Estado, pero su carácter de coalición heteróclita de intereses parciales yuxtapuestos planteaba límites serios a esos intentos. Este carácter impedía la consolidación de instituciones estatales de carácter moderno, expresadas en normas objetivas e instituciones impersonales, basadas en una clara delimitación entre lo público y lo privado. Esto colocaba al régimen bipartidista y al Estado a medio camino entre la sociedad tradicional y moderna.

Esa coalición de tendencias contradictorias hizo que la resistencia de los poderes tradicionales lograra obstaculizar las tímidas reformas políticas y sociales y obligara a las institucio-

nes modernas del Estado, de carácter impersonal y burocrático, a una continua negociación con las estructuras de poder previamente existentes en localidades y regiones. Esta situación presenta una doble cara: por un lado, reduce las exigencias modernizantes del Estado central pero, por otro, modera también sus tendencias excesivamente centralizantes y homogenizantes, que generalmente expresan la mentalidad de las élites tecnocráticas, poco conscientes de las diversidades regionales y locales³. Por otra parte, este estilo de modernización, centrado en lo económico y lo burocrático, produjo un efecto no deseado: un debilitamiento y un relajamiento de las formas tradicionales de cohesión social y política, que suplían la carencia de un Estado moderno, pero sin lograr la creación de las formas modernas de cohesión social y política, que respondieran a la nueva situación. Todo lo cual acentuaba la fragmentación del poder y disminuía las posibilidades de articulación entre las diferentes instancias del poder, lo mismo que entre las diferentes lógicas del quehacer político.

Los problemas resultantes de esta situación se hicieron evidentes en una mirada de mediano plazo, a partir de los años sesenta, cuando, como señalan Daniel Pecaú (1990) y Jorge Orlando Melo (1990), los rápidos cambios de la sociedad pronto hicieron ob-

soletos los marcos institucionales y las referencias culturales que el país poseía para canalizar y dar sentido a los procesos sociales: la urbanización y metropolización rápidas de la población, producidas por la migración aluvional de los campesinos hacia las ciudades, sobrepasaron la capacidad del Estado para proporcionar servicios públicos adecuados a la población urbana creciente, mientras que la industria nacional se mostraba igualmente incapaz para absorber esta mano de obra en aumento.

En ese sentido, además, los problemas sociales, tanto en las ciudades como en el campo, se configuraron como un caldo de cultivo favorable para las acciones violentas: en ese sentido, las limitaciones de la reforma agraria oficial y la criminalización de la protesta campesina acentuaron el divorcio entre movimientos sociales y partidos políticos tradicionales. Al respecto Jonathan Hartlyn (1993:212) señala como características de la relación del Frente Nacional con los movimientos sociales la no-creación de organizaciones populares que controlaran y canalizaran la movilización social por medio de mecanismos corporativistas y su consiguiente preferencia por una política de desmovilización –“divide y reinarás”- de las organizaciones autónomas de los sectores populares. Sólo se presentaron dos intentos de establecer alguna vinculación institucional

³ En ese sentido, convendría recordar los hallazgos de Julián Pitt-Rivers, 1989, *Un Pueblo de la Sierra: Grazañalema*, Alianza editorial, Madrid, que muestra cómo la estructura local o caciquil de poder sirvió para moderar las reformas centralizantes y autoritarias del régimen de Franco en España.

entre los partidos tradicionales y grupos amplios de población, las Juntas de Acción Comunal y la ANUC, cuyas evoluciones posteriores confirmaron la ambivalencia del régimen frente a la movilización social y la debilidad de los esfuerzos corporativistas del Estado colombiano. Por eso, puede afirmarse que bajo este régimen consociacional se da una cierta integración política del sector popular, pero con una escasa movilización de esos grupos por parte de los partidos tradicionales (Archila, 2003).

Este divorcio entre movimientos sociales y partidos se agravó por la presencia de movimientos de izquierda, interesados en la radicalización del movimiento campesino y por la instrumentalización de algunos sectores de los movimientos sociales (grupos sindicales, líderes estudiantiles, movimientos barriales, cívicos y populares) por parte de sectores partidarios de la opción armada. Esto influyó en el aumento de la criminalización de la protesta social por la lectura complotista de la movilización social, lo que produjo el cierre de espacios sociales para una alternativa de izquierda democrática, que hubiera podido canalizar el descontento social tanto de las masas populares del campo y ciudad como de las crecientes capas medias urbanas. No surge entonces un movimiento político moderno capaz de articular a los grupos descontentos con el sistema bipartidista, que empezó a proliferar, en los años sesenta, entre intelectuales, sectores medios urbanos y capas populares. Todo lo cual hace que

muchos perciban el sistema político como cerrado y como agotadas las vías democráticas de reforma del Estado, lo que condujo a algunos grupos radicalizados a la opción armada.

Sin embargo, el Frente Nacional logró cierta modernización del aparato del Estado y alguna despolitización y profesionalización de los funcionarios estatales, pero la lógica de la ampliación del empleo estatal, producida por la necesidad de mantener el equilibrio burocrático entre los partidos, siguió siendo la contraprestación de favores y el otorgamiento de prebendas, a las cuales tuvieron que adaptarse las nuevas instituciones. Obviamente, esto generaba inmovilismo e impedía una buena gestión. Sin embargo, la dinámica de planeación económica y administrativa logró importantes avances, después de superar algunos obstáculos por las negociaciones partidistas, gracias al apoyo de los gremios empresariales y de la producción, partidarios de la despolitización partidista del manejo global de la economía, reforzados por la AID y organismos internacionales de financiación (Dávila, 2002:77-81).

En ese sentido, según Andrés Dávila, que el Frente Nacional fue una respuesta relativamente exitosa para los problemas que pretendía solucionar, pero su dinámica permitía entrever el rasgo central de las críticas posteriores: era una solución estrecha para problemas de gran magnitud, lo que condujo a su agravamiento posterior. Sólo fue pensada como “una solución pactada y

reformista de reinstauración de la democracia “por medio de una aparentemente ”forma nueva de ejercer la política en Colombia por medio de la repartición y negociación antes que la competencia”. Y nunca fue concebida como instrumento de un profundo cambio social sino como “un reformismo dirigido desde arriba en la perspectiva de mantener el control de las elites sobre una sociedad en agudo proceso de cambio”.

Este reformismo terminaría luego “subordinado a la dinámica del juego político y a los factores que en el nuevo arreglo se consolidaban como dominantes, específicamente los líderes clientelistas de los niveles regionales”. Por eso, “su “honda preocupación por modernizar el Estado y la política de acuerdo con un orden capitalista” resultaría neutralizada por “el pragmatismo politiquero”, aunque la conducción tecnocrática de la economía lograría aislar significativamente la vida económica de esos problemas. Y, adicionalmente, el pacto frentenacionalista logró contener “cualquier amenaza de movilización social autónoma” a la vez que permitía “el paulatino fortalecimiento de sectores medios “subvencionados” por las políticas estatales”, pero esta exclusión de la movilización social y el privilegio a los viejos actores de la vida política “impidió el reconocimiento y acceso de nuevos sectores, varios de los cuales se convirtieron en la punta de lanza de los cuestionamientos a la legitimidad de una democracia que no per-

mitió la competencia interpartidista durante 16 años” (Dávila, 2002:95-97).

Efectos políticos de la modernización selectiva del Estado

El reformismo genera también la racionalización de la administración pública que a su vez produjo una consecuencia no deseada por la vida política: la creciente deslegitimación de la clase política tradicional más aún al mostrar una dislocación creciente entre los políticos que se movían principalmente dentro del ámbito nacional del poder y los que se movían primordialmente en los niveles regional y local, lo mismo que una creciente separación entre una lógica modernizante de largo plazo y una tradicional de corto plazo, al concentrar las reformas en la rama ejecutiva. En este contexto, Ana María Bejarano y Renata Segura (1996:52) han señalado la paradoja de que la tendencia a la modernización del Estado terminó fortaleciendo la descalificación de la política, que pretendía relegitimar. El carácter selectivo y desigual de esa modernización produjo, como resultado no deseado, “una creciente separación entre la sociedad y la clase política”, que tiende a ser percibida casi exclusivamente como “una realidad aparte, “autorreferenciada” y “dedicada a su autorreproducción”, al marginar a los órganos representativos de la discusión de la problemática económica y social. Esta separación, ya señalada anteriormente por Pecaut como uno de los rasgos característicos de la evolución polí-

tica reciente, hará cada vez más ilegítima a la clase política a los ojos de la sociedad, lo que no hace sino aumentar la crisis de representación política de la sociedad colombiana (Pecaut, 1987:126).

Esta modernización selectiva inducida por una mayor racionalización de la administración público produjo profundos enfrentamientos entre los sectores tecnocráticos y los políticos tradicionales. Por otra parte, los avances electorales de la ANAPO, que aprovechaba el descontento popular desatado por el estilo tecnocrático, obligaron a los gobiernos del bipartidismo, especialmente los de Misael Pastrana Borrero y Julio César Turbay Ayala a reactivar los manejos clientelistas en el plano local y regional y a moderar un tanto el enfoque tecnocrático. Años más tarde, el Nuevo Liberalismo de Luis Carlos Galán Sarmiento retomaría el tema, produciendo una disidencia dentro del partido liberal, que frustraría el intento reeleccionista de Alfonso López Michelsen y llevaría al triunfo de Belisario Betancur en 1980.

Después de la presidencia de Lleras Restrepo, sostienen Archer y Shugart (2002), todos los presidentes, unos más que otros, han intentado en vano revivir de alguna manera los intentos de reforma política, que fueron siempre obstruidos por el Congreso. Esta obstrucción llevó a los presidentes a tratar de implementar algunos de sus aspectos pasando por encima del legislativo. Estos autores subrayan que los análisis del presidencialismo colombia-

no pasan normalmente por alto los límites que la realidad política impone a los teóricamente excesivos poderes que la legislación, sobre todo a partir de la reforma de 1968, le otorga nominalmente al presidente.

Esta situación conduce, según Archer y Shugart (2002:126), a que el Congreso colombiano no sea una arena importante para la formulación de políticas nacionales o la representación de los correspondientes grupos de interés. Esto también tiene que ver con el sistema existente de partidos, que refleja intereses clientelistas e intercambio de favores de patronazgo y no una representación programática nacionalmente orientada: la autonomía de los políticos frente al liderazgo de su partido en el Congreso hace que el ejecutivo carezca del poder adecuado para limitar sus acciones particularistas (Archer y Shugart, 2002:145-160).

Sin embargo, Gary Hoskin (1990) ha sostenido en varias ocasiones que los partidos tradicionales no han sido los únicos responsables de la crisis política que aqueja al país, ya que señala que los partidos no han hecho sino representar fielmente “una extensión de una estructura oligárquica del poder que prevalece en la sociedad”, sostenida “por un sistema social altamente estratificado”, que ha logrado frustrar sistemáticamente los desafíos de los grupos disidentes gracias a la política de cooptación de sus élites y el status marginal de la mayoría de la población. Por eso, sería irreal que los partidos se apartaran significativamente de las prefe-

rencias políticas de los grupos dominantes en la sociedad, aunque se destacan los cambios políticos que la urbanización produjo en detrimento del clientelismo, más característico de las áreas rurales, lo mismo que la dinámica más moderna de las elecciones presidenciales (Hoskin, 1990:149-150), no obstante, conviene precisar que esta pérdida de funcionalidad del clientelismo y de la clase política tradicional no significa su desaparición de la escena política, ya que su importancia como intermediaria entre las regiones y la nación sigue siendo grande.

Finalmente, cabe anotar que el resultado de todas estas transformaciones en el conjunto de la opinión pública del país fue la crisis de representación política que termina afectando profundamente la legitimidad de las instituciones estatales y de las formas de mediación política de la sociedad (Leal, 1988). La dificultad de los partidos tradicionales para modernizarse y la no-aparición de nuevas organizaciones políticas más modernas y acordes al momento histórico del país fue produciendo una creciente separación entre política y sociedad, que dificulta todavía más la solución de los países que el país afronta. Incluso, el señalamiento continuo de los vicios y prácticas corruptas de la vida política, bastante justificadas por la realidad del país, tuvieron como consecuencia indeseada el descrédito generalizado de lo político como instrumento colectivo de construcción del orden social y como expresión articuladora de los diversos intereses e identidades de personas y grupos

sociales. Lo político terminó por identificarse con las prácticas de la clase política tradicional, cada vez más distante de los intereses colectivos que dice representar.

Las transformaciones de corto plazo

Esta situación se complica más con la elección popular de alcaldes y gobernadores, que desarticula el sistema tradicional de las “maquinarias” políticas por medio de las cuales los partidos tradicionales mediaban entre las localidades, las regiones y el Estado central. Esto profundiza aún más la crisis de legitimidad de la clase política profesional, cuya actividad es cada vez más vista como carente de sentido, porque estos cambios no han sido compensados con reformas políticas que neutralicen la tendencia a la fragmentación a las fuerzas políticas y que obliguen a los partidos a democratizar su función mediadora entre regiones, localidades y Estado central. La inexistencia de estas reformas termina por fortalecer el sistema clientelista y anarquizar aún más la actividad política, como se hace evidente en la proliferación de listas para las elecciones para el Congreso, los concejos municipales y las asambleas departamentales.

La conciencia de la crisis de legitimidad del régimen e instituciones políticas condujo a la reforma constitucional de 1991, que reconoció la pluralidad del país en lo étnico, religioso, cultural y regional, procuró una relación más equilibrada entre las ramas del poder y trató de corregir los vicios que

consideraba más evidentes de la vida política colombiana. Pero muchas de sus reformas fueron frustradas o limitadas por la legislación posterior y sus intentos de moralizar la vida política se vieron pronto neutralizados por la realidad de la actividad política. En su análisis del Congreso elegido inmediatamente después de la Asamblea Constituyente, Elizabeth Ungar (1995:117.122) señala que su balance de realizaciones no fue muy positivo o, por lo menos, que éstas distaron mucho de las expectativas que la nueva constitución había generado en torno a la renovación de las prácticas políticas por las cuales se criticaba a la institución.

En lo que respecta al equilibrio pretendido entre las ramas del poder, convendría recordar los comentarios de Ronald Archer y Matthew Shugart (2002) sobre el hecho de que el teóricamente excesivo poder que la Constitución de 1886 era más imaginario que real, por estar compensado por los poderes formales e informales de la clase política, representada en el Congreso. En ese sentido, afirman que la nueva constitución de 1991 es todavía más irónica, porque impuso limitaciones incluso mayores a la presidencia, a pesar de haber sido impulsada por el ejecutivo y resistida siempre por el legislativo. Por eso, estos autores, contra del generalizado optimismo en torno a

La conciencia de la crisis de legitimidad del régimen e instituciones políticas condujo a la reforma constitucional de 1991.

la nueva normatividad, sostienen que el resultado fue bastante decepcionante pues reducía los poderes del presidente, normalmente el impulsor de las reformas modernizantes, y fortalecía los del Congreso, generalmente el mayor obstáculo a las reformas (Archer y Shugart, 2002:160-171).

Curiosamente, la circunscripción nacional para el Congreso que estos autores consideraban positiva por disminuir la sobrerrepresentación de los sectores rurales, es hoy muy criticada por producir el resultado no deseado de una mayor fragmentación de los partidos y de la representación nacional, al facilitar aún más la tendencia de los políticos tradicionales y modernos, a la construcción de “microempresas electorales”, que impiden una acción coordinada de los partidos en el Congreso. En ese sentido, Eduardo Pizarro Leongómez (1996:212-217) muestra cómo se profundiza entonces la tendencia a la fragmentación y atomización de los partidos, evidenciadas en la profusión creciente de listas para los cuerpos colegiados a partir de 1991.

En la práctica, afirma Pizarro, el objetivo de la circunscripción nacional para el Senado, promover liderazgos nacionales que superaran el ámbito regional, terminó frustrado: incluso, es probable que se hayan debilitado los liderazgos regionales sin que se hayan renovado los liderazgos político-partidis-

tas de carácter nacional. Esto afecta, según Pizarro, no solo a partidos tradicionales sino también a los partidos y movimientos políticos de creación más reciente, que tampoco logran canalizar los intereses y problemas de los sectores que no se sentían expresados por los partidos tradicionales. Los nueve partidos o movimientos que se presentaron en la coyuntura electoral después de 1991 habían casi desaparecido del todo en el panorama electoral de 1994, como ejemplifica la Alianza Democrática M-19. Hasta el momento, sostiene este autor, se ha tratado más de movimientos testimoniales y particularistas y no de verdaderos partidos o movimientos del orden nacional. El resultado de esta situación, concluye Pizarro, es que esta fragmentación y atomización extremas de todos los partidos y movimientos políticos, sin excepción, constituye una ocasión que favorece la penetración de los dineros calientes en las campañas electorales (Pizarro, 1996: 217).

La crisis de la actual coyuntura

El recorrido histórico hecho anteriormente muestra que la actual crisis de representación que afecta a los partidos, especialmente a los tradicionales, no es tan nueva sino que viene gestándose en las últimas cuatro décadas: desde los años sesenta y setenta, se hizo notoria la creciente incapacidad de los partidos tradicionales para expresar los rápidos y profundos cambios que experimentaba la sociedad colombiana.

En ese sentido, estaríamos asistiendo a la lenta y paulatina erosión de la capacidad de los partidos para representar políticamente a la nación colombiana, que representa la también lenta y gradual superación de un modelo de Estado mediado por el bipartidismo, sin que aparezcan nuevos modelos de intermediación política organizada.

Esta erosión se hace evidente en el divorcio entre movilización social y política, señalado por Mauricio Archila en un libro próximo a aparecer, que evidencia los crecientes problemas del Estado colombiano y de los partidos tradicionales para seguir incorporando e integrando las luchas sociales de los grupos subalternos. Esta crisis política tiene como otra cara de la moneda la emergencia de una amplia pero dispersa movilización social y popular al margen de los partidos tradicionales, que busca una ampliación de la ciudadanía social pero no política, que se distancia de la expresión política partidista para inscribirse generalmente en una tendencia cívica pero “antipolítica”. Esta incapacidad de integración social por el sistema y el Estado se refleja en el desborde de las luchas sociales, que hace cada vez más frecuente el recurso a la represión, ilegalización y criminalización de la protesta, que era casi siempre considerada como instrumentalizada por la guerrilla.

A mi modo de ver, esta descripción de crisis puede ser leída como el resultado del lento y paulatino agotamiento del modelo decimonónico de Estado que había estado vigente en el

país desde los comienzos de nuestra vida republicana hasta el fin de la primera mitad del siglo XX.. Los partidos tradicionales como subculturas y federaciones laxas de redes locales y regionales de poder habían sido los vehículos de expresión y canalización de las tensiones y contradicciones de la sociedad colombiana durante el siglo XIX y primera mitad del XX.

Paradójicamente, los intentos de modernización de los aparatos estatales para adecuarse a los rápidos cambios de la sociedad terminar contribuyendo a la crisis de legitimidad de los partidos, ya que su carácter selectivo produce tensiones y escisiones entre los sectores políticos de estilo tecnocrático y los de corte tradicional tanto en esos aparatos como dentro de los partidos tradicionales. Estas tensiones y escisiones terminan por conducir a la desarticulación de los poderes locales y regionales, existentes de hecho o de derecho, con relación a los aparatos del Estado central y la organización de los partidos en el ámbito nacional. Y esta pérdida de la capacidad articuladora de los partidos significa la desorganización de los mecanismos que permitían que la presencia diferenciada del Estado no condujera a la ruptura interna entre las diferentes lógicas de funcionamiento que ella implicaba. La paradoja del reformismo lleva a un callejón sin salida: las reformas modernizantes son consideradas excesivas por los políticos tradicionales y poderes locales regionales, pero demasiado tímidas para conseguir

apoyo de los grupos populares y clases medias.

No obstante, la erosión de la mediación partidista de la sociedad no significa la total desaparición de los partidos, que conservan todavía bastante capacidad de movilización y una gran capacidad de adaptación a los cambios institucionales. Por otra parte, el carácter pluriclasista de los partidos en particular del Liberal resulta a veces problemático: sus matices reformistas lo separan de los grupos sociales establecidos que también hacen parte de él, mientras que la resistencia de éstos al cambio lo hacen inadecuado para tramitar las demandas populares. Estas contradicciones internas permiten que Francisco Gutiérrez (2001:72-74) describa su situación como “democratización anómala o fallida” para concluir que en Colombia no se debe hablar de “catástrofe” sino de descomposición, debido a la tradición histórica de los partidos y de las identidades de la población colombiana con ellos, junto con una enorme flexibilidad para adaptarse a los cambios institucionales. Por el lado del partido conservador, como muestra Mónica Pachón (2001), la situación parece más grave: su dirección es débil tiene serias divisiones internas y poca proyección nacional, y ha sido más golpeado por la urbanización del país. Sin embargo, cuenta aún con algún capital electoral, especialmente en algunas regiones, lo que le permite una importante figuración en el gobierno y el Congreso. Y el caso de las ter-

ceras fuerzas tampoco escapa a las tendencias hacia la fragmentación y desorganización interna, como muestra Ricardo Peñaranda (2001) para el caso de los grupos indígenas.

Esta situación hace que Scott Mainwaring considere que el sistema colombiano de partidos es uno de los más singulares del mundo debido a su tendencia a la personalización y atomización, expresada en una gran erosión organizativa, una falta de control de las organizaciones sobre las listas de candidatos, la feroz competencia intrapartista y la consiguiente proliferación de listas, cuyo resultado afecta el funcionamiento del Congreso y la calidad de la representación. Pero, a pesar de esta erosión de las organizaciones partidistas, los partidos tradicionales mantienen su predominio electoral, conservan un alto nivel de lealtades (aunque menor que antes) y experimentan poca

mar que esa combinación de adscripciones nacionales y formación de grupos regionales y locales fue funcional para la articulación de las redes locales y regionales de poder al conjunto de la vida política nacional durante el siglo XIX y la primera mitad del XX. Esa articulación ha permitido una presencia diferenciada del Estado que responda a los diferentes momentos y situaciones locales a la vez que supere las tendencias centrífugas de esos grupos

Igualmente, es claro que el éxito de Uribe Vélez se enmarca en una seria crisis de los partidos tradicionales y en un rechazo mayoritario de la población a sus prácticas corruptas. Esta crisis no es necesariamente perjudicial pues supone una independencia frente a los votos “amarrados” a las lealtades partidistas, la correspondiente consolidación del voto de opinión y la mayor correspondencia entre la vida política y la vida de la nación, independientemente de las maquinarias de los partidos, en la actual coyuntura electoral. Todo esto representa un avance en materia de cultura política moderna y una oportunidad para la superación de la crisis de representación política que aqueja al país. Pero es preocupante que este voto de opinión pueda ser resultado de un hábil manejo de los medios de comunicación para montarse en el creciente descontento de la opinión pública en torno a la actividad política tradicional y el rechazo a la zona de despeje. También es preocupante el hecho de que muchos de los candidatos en auge, de derecha o izquierda, apelen al rechazo de “la

La experiencia histórica de Colombia permitiría afirmar que esa combinación de adscripciones nacionales y formación de grupos regionales fue funcional para la articulación de las redes locales y regionales de poder al conjunto de la vida política nacional.

volatilidad electoral (cambio de preferencias de una elección a otra), en comparación con otros países como Ecuador, Venezuela, Perú o Rusia.

En ese sentido, la experiencia histórica de Colombia permitiría afir-

Política” como estrategia política: una cosa es la crítica a los vicios y corruptelas de la política tradicional y otra es la descalificación de la actividad política en general, que puede profundizar aún más la crisis de legitimidad de la vida política y favorecer el auge de soluciones autoritarias. Además, no bastan medidas legislativas de reingeniería constitucional para purificar los rasgos criticados y criticables de la política tradicional mientras no se modifiquen las condiciones sociales, culturales y económicas que la hacen funcional y el tipo de Estado que hace presencia diferenciada en la sociedad colombiana con poca capacidad para dirimir conflictos y garantizar a la población el pleno goce de sus derechos y el acceso a los bienes y servicios de la nación. Y estas modificaciones pasan por la cultura política y por la recuperación de la dignidad de la política real y concreta como mecanismos para la búsqueda de soluciones concertadas para la solución de los problemas de la sociedad colombiana.

Por otra parte, no siempre las críticas a la política tradicional tienen suficientemente en cuenta la heterogeneidad interna de un país y de un Estado solo parcial y selectivamente modernizados: en realidad, la vida política colombiana se caracteriza por una tensión entre formas tradicionales y modernas de actividad política. Y las formas tradicionales no dejan de representar a buena parte de la población colombiana, cuya única posibilidad de acceso a los bienes y servicios que su-

puestamente debería prestar el Estado es la vía clientelar, la intermediación de gamonales y caciques tradicionales, que a veces cumplen la función de adaptar y descentralizar normas pensadas desde el centro del país, que no tienen en cuenta las particularidades de las regiones y las localidades por responder a una lógica tecnocrática y burocrática, excesivamente homogeneizante.

La recuperación de la Política pasa entonces por una nueva lectura, más compleja, del fenómeno del clientelismo, que supere la condena meramente moralista y lo enmarque dentro del proceso de construcción del Estado, que muestre las funciones que cumple en él, sus relaciones con las sociedades tan complejas donde surge y su papel de instrumento de presencia diferenciada del Estado según las condiciones de esas sociedades. Dentro de una lectura más procesual del desarrollo político del país, se podría sostener que el clientelismo es la manera que tiene el Estado de hacer presencia de manera indirecta y gradual en determinadas circunstancias de lugar y tiempo, lo mismo que como la respuesta de una sociedad desigual y heterogénea frente a la superposición de una estructura formalmente democrática, de carácter homogeneizante. Así, el clientelismo aparece como instrumento funcional cuando el Estado se moderniza sólo parcial y selectivamente para buscar una mayor eficiencia en la planificación y ejecución del gasto público mientras persisten amplios sectores de la población y del territorio sin posibi-

lidad de acceso directo a los aparatos de ese Estado selectivamente modernizado, junto con poderes políticos de orden tradicional que se resisten a la modernización. En ese sentido, la expansión actual del clientelismo responde al divorcio entre el manejo de la política económica del Estado, cada vez más en manos de una élite tecnocrática y burocratizada, bastante al margen de las adscripciones bipartidistas, y la política bipartidista que copaba la política institucionalizada y dominaba la representación política en el Congreso. Y, desde el punto de vista de la sociedad, el clientelismo puede leerse como un sistema primitivo y deformado de seguridad social, que se alimenta de las necesidades de sectores populares y medios de acceder a los servicios del Estado y de la necesidad de legitimación electoral de la clase política tradicional.

Esta nueva mirada supone recuperar “la función de inclusión política”, aunque trunca, del clientelismo, que algunos autores como María Emma Wills (2001) le reconocen para buscar su transformación positiva, en sentido democrático. Para ella, el clientelismo se reproduce dentro de un “sistema político agrietado”, donde se presenta el contraste entre el mundo de la Gran Política, en manos de

las élites y los técnicos, y el mundo de la “pequeña política” de gamonales y caciques: los primeros tratan, “a veces de manera infructuosa”, de ordenar la política estatal “desde arriba”, mientras los segundos “tramitan dispersa y desordenadamente las demandas de sus clientelas”. Este contraste mostraría precisamente que el Estado funciona de manera diferenciada según las diferentes circunstancias.

Por otra parte, la erradicación de las corruptelas introducidas por el clientelismo debería comenzar por mejorar la eficiencia y cobertura de los aparatos del Estado moderno combinando la racionalidad tecnocrática con una mayor sensibilidad frente a las diferencias culturales, sociales y económicas de las diversas regiones y localidades. Lo mismo que por la mejor institucionalización de las relaciones de intermediación entre localidades, regiones y Nación, gobernadores de departamentos y los congresistas respectivos, para superar el esquema de microempresas electorales que los hacen elegir en el Congreso sin contacto con las regiones a las que supuestamente representan. Esto supondría una mejor institucionalización de las

El clientelismo se reproduce dentro de un "sistema político agrietado", donde se presenta el contraste entre el mundo de la Gran Política, en manos de las elites y los técnicos, y el mundo de la "pequeña política" de gamonales y caciques.

relaciones entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, la mejor implementación y el mejor desarrollo de la

carrera administrativa, para independizar el manejo del Estado de la adscripción partidista y garantizar la financiación de las campañas electorales y de la clase política profesional. También ayudaría bastante la actualización del censo electoral, que hoy representa una realidad demográfica superada hace décadas.

El contraste que hemos realizado entre la situación actual de crisis y una mirada histórica de largo y mediano plazo nos sitúa muy lejos de una visión apocalíptica que anuncia el inminente colapso de las instituciones democráticas y el régimen político de Colombia. Sin embargo, el recorrido histórico que hemos mostrado nos muestra una erosión gradual del modelo de mediación que el bipartidismo desarrollaba entre la sociedad y el Estado colombianos y que permitió el funcionamiento de un Estado que hacía presencia diferenciada según las situaciones regionales y locales durante el siglo XIX y buena parte del XX. Esa erosión no es necesariamente negativa pues puede significar una oportunidad para una más profunda democratización de la nación, si se lograra un acercamiento menos negativo a la realidad política concreta para introducir las reformas políticas necesarias para esa democratización. Esa democratización pasa por la recuperación de la dimensión de la política como construcción colectiva de nación, que tiene dimensiones culturales, sociales y económicas.

Bibliografía

Archer Ronald y Matthew Soberg Shugart, El potencial desaprovechado del predominio presidencial en Colombia. Scott Mainwaring y Matthew Soberg Shugart (Comp.), *Presidencialismo y democracia en América Latina*, Buenos Aires: Paidós, 2002.

El potencial desaprovechado del presidencialismo en Colombia. Scott Mainwaring y Matthew Soberg Shugart (Comp.), *Presidencialismo y democracia en América Latina*, Buenos Aires: Paidós, 2002.

Archila, Mauricio, *Idas y venidas, vueltas y revueltas. Protestas sociales en Colombia, 1958-1990*, en prensa. , 2003.

Ayala, César Augusto, *Resistencia y Oposición al establecimiento del Frente Nacional. Los orígenes de la Alianza Nacional Popular (ANAPO)*, Colombia 1953-1964, Bogotá:COLCIENCIAS y CINDEC, 1996.

Bejarano, Ana María y Renata Segura, El fortalecimiento selectivo del Estado durante el Frente Nacional. *Controversia*, No. 169, Bogotá: CINEP, noviembre de 1996.

Bejarano, Ana María, *The Constitution of 1991. An Institutional Evaluation Seven Years Later*. Charles Bergquist, Ricardo Peñaranda y Gonzalo Sánchez, 2001, *Violence in Colombia, 1990-2000. Waging war and negotiating peace*, SR Books, Wilmington, Delaware, 2001.

Cepeda Ulloa, Fernando, *El Congreso Colombiano ante la crisis*. Francisco Leal Buitrago (Ed.), *Tras las huellas de la crisis política*, Bogotá: Tercer Mundo editores, FESCOL e IEPRI (Universidad Nacional de Colombia), 1996.

Dávila Ladrón de Guevara, Andrés y Natalia Delgado Varela, *La metamorfosis del sistema político colombiano: ¿clientelismo de mercado o nueva forma de intermediación?* Francisco Gutiérrez (Comp.), *Degradación o cambio. Evolución del sistema político colombiano*, Bogotá Grupo editorial Norma, 2003.

Dávila, Ladrón de Guevara, Andrés, *Democracia pactada. El Frente Nacional y el pacto constituyente*, Bogotá: CESO y Departamento de Ciencia Política, UNIANDES, IFEA, Editorial Alfa y Omega, 2002.

Deas, Malcolm, *Algunas notas sobre la historia del caciquismo en Colombia*. Malcolm Deas, 1993, *Del poder y la gramática*, Bogotá: Tercer Mundo editores, 1993.

_____, *Canjes violentos: reflexiones sobre la violencia política en Colombia*. Malcolm Deas y Fernando Gaitán Daza, 1995, *Dos ensayos especulativos sobre la violencia en Colombia*, Bogotá: FONADE y Departamento Nacional de Planeación, 1995.

El Tiempo, 7 de agosto de 2003.

_____, 23 de julio de 2003.

Escalante, Fernando, *Clientelismo y Ciudadanía en México. Análisis Político* No. 26, Bogotá: IEPRI, Universidad Nacional de Colombia, diciembre de 1995.

_____, *Ciudadanos Imaginarios*, México: El Colegio de México, 1995.

Gellner, Ernest, *El arado, la espada y el libro. Estructura de la historia humana*, México: Fondo de Cultura Económica, 1992.

Gómez Buendía, Hernando. *La ruptura*. *Semana*, No. 1028, enero 4 de 2002.

González, Fernán E, *Crisis o*

Transición del sistema político. *Controversia* No. 171, Bogotá: CINEP, diciembre de 1997.

_____, Poblamiento y conflicto social en la historia colombiana. Fernán González, *Para leer la política. Ensayos de historia política colombiana*, Bogotá: CINEP, T. I., 1997.

González, Fernán E; Ingrid J. Bolívar y Teófilo Vásquez, *Violencia política en Colombia. De la nación fragmentada a la construcción del Estado*, Bogotá: CINEP, 2003.

Guerra, François – Xavier, Lugares, formas y ritmos de la política moderna. *Boletín de la Academia Nacional de Historia*, T. LXXXII, No. 285, Caracas, 1989.

Gutiérrez Francisco y Andrés Dávila, Paleontólogos o politólogos: ¿qué podemos decir hoy de los dinosaurios? *Revista de Ciencias Sociales*, No. 6, Bogotá, 2000.

Gutiérrez, Francisco, Historias de democratización anómala. El Partido liberal en el sistema político colombiano desde el Frente Nacional hasta hoy. Francisco Gutiérrez (Comp.), *Degradación o cambio. Evolución del sistema político colombiano*, Bogotá: Grupo editorial Norma, 2001.

Hartlyn, Jonathan, *La política del régimen de coalición. La experiencia del Frente Nacional en Colombia*, Bogotá: Tercer Mundo editores, Ediciones UNIANDES, CEI, 1993.

Hoskin, Gary, Los partidos tradicionales: ¿hasta dónde son responsables de la crisis política?. Francisco Leal Buitrago y León Zamosc, *Al filo del caos. Crisis política en la Colombia de los años 80*, Bogotá: Coedición Universidad Nacional de Colombia (IEPRI) y Tercer Mundo editores. 1990.

Leal Buitrago Francisco y Andrés Dávila Ladrón de Guevara, *Clientelismo. El sistema político y su expresión regional*, Bogotá: Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, IEPRI, y Tercer Mundo editores, 1990.

Leal Buitrago, Francisco, Alcances y dilemas de la crisis política. Francisco Leal (Ed.) *Tras las huellas de la crisis política*. Bogotá: Tercer Mundo editores, FESCOL y el IEPRI (Universidad Nacional de Colombia), 1996.

_____, Democracia oligárquica y rearticulación de la sociedad civil: El caso colombiano. *Pensamiento Iberoamericano* No. 14, Madrid, julio-diciembre de 1988.

_____, El sistema político del clientelismo. *Análisis Político*, No. 8, septiembre- octubre de 1989.

_____, Francisco, Estabilidad macroeconómica e institucional y violencia crónica. Francisco Leal Buitrago, *En busca de la estabilidad perdida. Actores políticos y sociales en los años noventa*. Tercer Mundo editores, IEPRI – Universidad Nacional- Bogotá y COLCIENCIAS, Bogotá, 1995.

_____, La crisis política en Colombia: alternativas y frustraciones. *Análisis Político* No. 1, mayo-agosto de 1987. Martz, John D, *The Politics of Clientelism. Democracy and State in Colombia*, Transactions Publishers, New Brunswick and London, 1997.

Melo, Jorge Orlando, Algunas consideraciones globales sobre “modernidad” y “modernización” en el caso colombiano. *Análisis Político* No. 10, Bogotá: IEPRI, Universidad Nacional, mayo - agosto de 1990.

Mouzelis, Nicos, Populismo y clientelismo como modos de incorporación de las masas en sistemas políticos semi-periféricos. Carlos M. Vilas (comp.), *La democratización fundamental. El populismo en América Latina*, México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes,

1994.

Ocampo, José Antonio, Crisis mundial y cambio estructural (1929-1945). José Antonio Ocampo (Ed.), *Historia Económica de Colombia*, Bogotá: FEDESARROLLO y Siglo XXI editores, 1987.

Oquist, Paul, *Violencia, política y conflicto en Colombia*, Bogotá: Instituto de Estudios Colombianos, Biblioteca del Banco Popular, 1978.

Pachón, Mónica, 2001, Partido conservador y sus dinámicas políticas. Francisco Gutiérrez, (Comp.), *Degradación o cambio. Evolución del sistema político colombiano*, Bogotá: Grupo editorial Norma, 2001.

Palacios, Marco, *Entre la legitimidad y la violencia. Colombia 1875-1994*, Bogotá: Grupo editorial Norma, 1995.

_____, La fragmentación regional de las clases dominantes en Colombia: una perspectiva histórica. Marco Palacios, *La clase más ruidosa y otros ensayos sobre política e historia*, Bogotá: Grupo editorial Norma, 2002.

_____, Proyecciones sobre escenarios de mediano y corto plazo.

Fundación Ideas para la Paz, Bogotá, 2001.

_____, Presencia y ausencia de populismo: para un contrapunteo colombo-venezolano. Marco Palacios, *De Populistas, mandarines y violencias. Luchas por el poder*, Bogotá: Editorial Planeta Colombiano, 2001

Pecaut, Daniel, 2000. Populismo imposible y Violencia. *Guerra contra la Sociedad*, Bogotá: Editorial Planeta Colombiano, 2001.

_____, *Crónicas de dos décadas de historia colombiana, 1968-1988*, Bogotá: Siglo XXI editores, 1988.

_____, *Midiendo fuerzas. Balance del primer año del gobierno de Álvaro Uribe Vélez*, Bogotá: editorial Planeta colombiano, 2003.

_____, Modernidad, modernización y cultura. *Gaceta*, No. 8, Bogotá: COLCULTURA, agosto-septiembre de 1990.

_____, *Orden y Violencia: Colombia 1930-1954*, Bogotá: Ediciones Siglo XXI, CEREC, 1987.

_____, El populismo gaitanista. Carlos M. Vilas, *La democratización fundamental. El populismo en América Latina*, México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1994.

Peñaranda, Ricardo, 2001, Los nuevos ciudadanos: las organizaciones indígenas en el sistema político colombiano. Francisco Gutiérrez, (Comp.), *Degradación o cambio. Evolución del sistema político colombiano*, Bogotá: Grupo editorial Norma, 2001.

Pitt-Rivers, Julián, *Un Pueblo de la Sierra: Grazañalema*, Madrid: Alianza editorial, 1989.

Pizarro Leongómez, Eduardo, La crisis de los partidos y los partidos en la crisis. en Francisco Leal Buitrago (Ed.), *Tras las huellas de la crisis política*, Bogotá: Tercer Mundo editores, FESCOL e IEPRI (Universidad Nacional de Colombia), 1996.

Pizarro, Eduardo y Ana María Bejarano, Colombia. A failing State?. *Revista, Harvard Review of Latin America*, 2003.

Posada-Carbó, Eduardo. Colombian Institutions. On the paradox of Weakness. *Revista, Harvard Review of Latin America*, 2003.

Sánchez, Gonzalo y Donny Maertens,

Tierra y violencia. El desarrollo desigual de las regiones. *Análisis Político*, No. 6, enero-abril de 1989.

Sánchez, Gonzalo, Rehabilitación y violencia bajo el Frente Nacional. *Análisis Político*, No. 4, mayo-agosto de 1988.

Semana. No.1035, 4 de marzo de 2002.

Thoumi, Francisco, *Economía política y narcotráfico*, Bogotá: Tercer Mundo editores, 1994.

Ungar Bleier, Elizabeth, (con la colaboración de Inés Elvira Andrade), El Congreso en la nueva realidad: ¿modernización o retroceso?. Francisco Leal Buitrago (Comp.), *En busca de la estabilidad perdida. Actores políticos y sociales en los años noventa*, Bogotá: Tercer Mundo editores, IEPRI (Universidad Nacional de Colombia) y COLCIENCIAS, Bogotá, 1995.

Wills, María Emma, Clientelismo y Política. Ni tan cerca ni tan lejos. *El Periódico*, No. 18, Bogotá: Universidad Nacional, enero 21 de 2001.

